

Argentina: impunidad y clientelismo

Este comentario editorial reflexiona sobre la realidad política y social de Argentina tras la aparición del cadáver del fiscal Alberto Nisman, encargado de la causa AMIA, el peor atentado terrorista sufrido por el país austral. Se analiza la respuesta indignada de la sociedad ante los síntomas de impunidad que reviste la investigación oficial con otros precedentes de muertes misteriosas nunca esclarecidas, en el contexto de una sociedad lastrada en su desarrollo por las medidas económicas y la dependencia clientelar ejercida por el partido peronista de Cristina Fernández a través de planes y programas de ayuda social. Se cierra el análisis con la reflexión sobre las perspectivas de alternancia política en las elecciones de octubre en un régimen en el que el populismo del partido en el poder se viene consolidando desde hace décadas, en un Estado que parece haber sido engullido por la ideología peronista.

En Argentina, el país del *fin del mundo* en palabras del papa Francisco, se han sucedido hechos que quienes no han vivido largo tiempo o no han conocido otras etapas de su pasado político no alcanzan a comprender. En otras ocasiones (*Razon y fe...*) hemos intentado explicar ciertas políticas argentinas; esta vez el suceso que conmocionó a la sociedad y llegó a las redacciones del mundo entero tiene otras dimensiones de extrema gravedad. El 18 de enero se dio a conocer la aparición del cadáver del fiscal Alberto Nisman con un disparo en la cabeza y en su propio domicilio. Precisamente un día antes había anunciado que

presentaría ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados las pruebas contra Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y los piqueteros Luis d'Elía y Fernando Esteche, por encubrimiento de los culpables del atentado con coche bomba a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y más de 300 heridos.

Después de un largo y enredado proceso judicial, con la citación de decenas de testigos, en octubre de 2006 los fiscales Nisman y Marcelo Martínez Burgos ya habían acusado formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al movimiento Hezbolá de ejecutarlo, según investigaciones internacionales después de que el gobierno de Menem decidiera suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. La causa siguió abierta hasta que el 13 de enero de 2015 Nisman presentó su denuncia ante el juzgado federal de Ariel Lijo por el memorándum en el que el gobierno solicitaba a Interpol que dejara sin efecto el pedido de captura internacional contra los funcionarios de Irán de los que se sospechaba, a cambio de establecer relaciones con dicho país, supuestamente de intercambio de petróleo iraní por cereales argentinos y de venta de armas a Irán. Determinadas pruebas se aportaban en escuchas entre agentes y funcionarios iraníes y los hombres de la presidenta, escuchas que han ido saliendo a la luz en distintos medios y que comprometen seriamente la credibilidad del discurso oficial.

La muerte del fiscal despertó las comprensibles sospechas de asesinato, a las que siguieron las de impunidad por las opacidades de la investigación, los errores periciales y las evidentes contradicciones de la fiscal Fein encargada del caso, empeñada en hablar de suicidio. Se ignoraron las amenazas de muerte que el Fiscal venía recibiendo, el escenario del crimen fue hollado por una multitud de personas que borraron rastros, no se aplicaron los medios adecuados para los análisis periciales, etc. La indignación de la sociedad se hizo visible el 18-F (18 de febrero) en una multitudinaria marcha silenciosa convocada por el gremio judicial y distintos fiscales (más de 400.000 personas). Una ola de repudio —abundaban carteles de «Todos somos Nisman»— se extendió a través de las redes sociales y

llegó hasta la quinta presidencial de Olivos, la Plaza de Mayo y diferentes barrios de la Capital y el Gran Buenos Aires. Se pedía pacíficamente justicia, pero provocaron las airadas respuestas y las interpretaciones contradictorias de la presidenta y sus partidarios.

Desde que la exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, se presentó en nombre de sus hijas como querellante en la causa y llevó a cabo nuevos estudios periciales que agudizan las sospechas de asesinato, se ha intensificado la campaña de desprestigio *post mortem* de la víctima y de todo su entorno familiar por parte de políticos y funcionarios oficialistas. Entre otras medidas, el gobierno publicó en los medios internacionales una solicitada —comunicado pagado— para justificar la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia de Nisman; y el jefe de Gabinete de la Presidencia Aníbal Fernández, acusó, con el tono habitual de sus intervenciones: «Nisman dedicaba los fondos públicos a salir con minas (mujeres) y pagar *ñoquis* (funcionarios que cobran y no hacen nada), un sinvergüenza como pocos se han visto en este país». Incluso el gobierno se preguntó si tal vez el fiscal no perseguía «un efecto político desestabilizador», evocando el fantasma del golpe de estado, recurso del victimismo característico de los regímenes que se sienten amenazados.

En su última comparecencia de la legislatura, Cristina Fernández mostró, en su extensa y belicosa arenga de varias horas, su desprecio por el fiscal, por los jueces y por la sociedad que pide la apertura de los archivos secretos y de una investigación seria e independiente del atentado a la AMIA, cuando descubrió en la sala los carteles que enarbolaban algunos diputados disidentes. Sus fieles, sin embargo, los que abarrotaban el Congreso y las multitudes que habían sido transportadas desde todo el país hasta la plaza, la ovacionaban como es habitual en sus discursos. Quedó patente en esta circunstancia el clima de división que vive la Argentina en estos momentos, y ante el que cabe preguntarse qué puede pasar en las elecciones de octubre. No es prematura la pregunta, porque en el contexto argentino ya se vive desde hace meses, con manifestaciones y campañas publicitarias de los posibles candidatos, una incontestable atmósfera electoral.

Atmósfera electoral de conflicto

En una sociedad democrática todo proceso electoral debería suponer la garantía legítima de alternancia. Sin embargo, en Argentina la continuidad del peronismo como fuerza transversal y omnipresente en amplias capas de la sociedad, no permite garantizarla. La única alternancia posible parece ser la de diversos grupos de la misma familia peronista, incluso por herencia matrimonial (Perón e Isabelita, Néstor Kirchner y Cristina) o con la creación de *segundas marcas* (los supuestos rivales, también peronistas). Ante quienes acusan al gobierno de dejar una herencia inasumible —una *bomba*— a quien surja de las elecciones, el ministro de economía, Axel Kicillov, el gran protagonista de las expropiaciones como la de Repsol, reconoce que «No estamos armando ninguna *bomba* porque estamos pensando en quedarnos, no en irnos».

El balance de los gobiernos peronistas, especialmente de la presidencia de Cristina Fernández, no justificaría la fidelidad a las siglas: en su segundo mandato (2012-2015) Argentina ha sufrido la tercera mayor inflación del mundo tras Venezuela y Sudán, superando el 30% y depreciando el peso el verano de 2014; y el producto por habitante ha supuesto una disminución del 2% respecto de 2011. Los fríos datos económicos repercuten de un modo muy real en la vida de las gentes trabajadoras que, a pesar de las medidas gubernamentales, sostienen el país con su esfuerzo.

El contexto internacional no permite la esperanza para una economía que ha perdido competitividad por la fuerte caída del precio de los cereales y sus derivados, la depreciación de las monedas de los compradores como el euro, el dólar y el real y a pesar de la creciente presión fiscal que se impone a los productores (más de un 37%, según el FMI). El discurso populista del que hace gala el gobierno, de enfrentamiento de ricos y pobres, con un continuo ataque a la inversión y a los capitales, incluso con el *cepo cambiario* (restricciones cambiarias de pesos a dólares) y el impuesto a la importación de bienes y equipos que ha motivado el cierre de muchas fábricas por falta de recambios, maquinaria e incluso libros, ha llevado a la reducción

de la inversión en un 17% del PIB en el período 2012-2015. Lo evidencian las carencias en el parque vial, la energía, la telefonía o los ferrocarriles de larga distancia.

Invertir en Argentina no ofrece las garantías necesarias para la creación de nuevas plantas industriales; y el temor de las empresas extranjeras en funcionamiento ante posibles expropiaciones agudiza la desconfianza y desanima a los inversores. El crédito y el mercado de capitales son escuálidos y las reservas del Banco Central y de los fondos para las jubilaciones han sufrido constantes detracciones para hacer frente a un gasto público que pesa casi tanto como en los países desarrollados aunque con una productividad mucho menor, en parte por un empleo público desbordado y por el costo de los múltiples planes sociales. A pesar de tantas dificultades impuestas, una gran parte de la sociedad resiste con su esfuerzo cotidiano a pesar de las continuas amenazas de ajustes violentos que enarbolan los responsables políticos si no continúan en el poder los suyos. El peronismo siempre ha considerado a «los otros», los que piensan de forma diferente, el enemigo de esa patria que dicen representar de modo exclusivo; y ha amenazado con el fantasma del desastre total si no son los que gobiernan. De ello pueden dar cuenta muchos periodistas, jueces y grupos sociales que no comparten la *filosofía K* (la ideología Kirchnerista). El clima de conflictividad que desde instancias gubernamentales se fomenta a través de medios controlados y de organizaciones paralelas no augura los pactos de consenso y progreso que el país necesita.

La realidad social

El gobierno, como mérito propio, enarbola la disminución de la pobreza gracias a sus planes sociales en la que denomina *su década ganada*. Sin embargo, el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) sostiene con fundamento científico que en Argentina es pobre el 40% de las personas que viven en hogares con niños, lo que demuestra la ineficacia de dichos planes a pesar de su extraordinario costo. En dicho informe (2010-2013) se señala que dos de cada diez

hogares de los principales centros urbanos las recibe, pero las tasas de pobreza se incrementaron en 2012 y 2013 con cuatro de cada diez hogares que no pueden cubrir sus necesidades y empeoramiento en villas y asentamientos; y «si bien hubo una expansión de los programas sociales entre 2010 y 2013, este hecho no se tradujo en un cambio estructural significativo».

Otras graves deficiencias no han sido superadas por estos medios: déficits elevados en materia de acceso a red de agua y cloacas (11% y 32%, respectivamente); 22% de los hogares habitan en áreas contaminadas; dos de cada diez no dispone de calles pavimentadas y el 44% no reconoce presencia ni protección policial regular, con un incremento significativo de la delincuencia, asociada en gran medida al tráfico de drogas. La calidad del empleo, según el mencionado informe, evidencia déficits serios como la persistencia de un sector informal, con una de cada tres personas bajo contratación laboral no declarada, y siete de cada diez que no realizan aportes jubilatorios (no cotizan). Aunque el estudio no analiza la realidad de 2014, la devaluación del peso, el cepo cambiario e importador y la inflación subsiguiente no han hecho más que agravar la situación. Otros estudios como el de inseguridad realizado por la ONU ha registrado 973,3 robos por cada 100.000 habitantes, la más alta cifra de toda Latinoamérica.

A través del Ministerio de Desarrollo Social que dirige la hermana de Néstor Kirchner, el Gobierno concede una multiplicidad de planes y programas —los programas *Conectar*, *Igualdad*; los planes *Argentina Trabaja*, *Techo Digno*, *Jóvenes con Más y Mejor Trabajo*, *Jefes de Hogar*, *Progresar* y *Procrear* son algunos de los más conocidos— *graciables*, es decir, que no implican ninguna contraprestación: por ejemplo, en 2013, 58 planes contaron con más de 16 millones de beneficiarios (74.000 millones de pesos); en 2014, 60 programas de ayuda social para 18 millones (120.000 millones). En otras palabras, más del 40 % de la población recibe algún tipo de ayuda estatal que no debe devolver ni siquiera con servicios. En algunos hogares, una misma familia recibe por planes sociales diversos una cantidad que hace que todos sus miembros desistan de trabajar o estudiar, aceptando niveles de subsistencia, o engrosando la economía sumergida para no perder los subsidios.

A los programas se suman las numerosas pensiones no contributivas, planes de trabajo no controlados, discrecionalidad en el otorgamiento de ayudas, con un uso político clientelar perenne. Se genera una situación de dependencia de la tutela del estado que en muchos hogares pasa de generación a generación, y que es seña de identidad del peronismo desde su implantación en los años cincuenta del pasado siglo. De los planes no están exentos miles de inmigrantes de países limítrofes que pueblan villas de emergencia y a los que, oportunamente, en etapas próximas a las elecciones se incluye en el censo electoral mediante la concesión de documentos de identidad argentinos, sólo porque convienen como masa electoral. Pero de la justa compensación por su trabajo sí parecen estar exentos quienes han cumplido con sus obligaciones fiscales durante décadas, como demuestra el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), la institución pública que más planes otorga (en 2013, 33.000 millones) cuando apela las sentencias judiciales que reconocen deudas del estado a los jubilados contribuyentes y les piden aportes suplementarios para recibir sus magras prestaciones.

Una mirada al futuro próximo

El 25 de octubre, con el PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) previo del 9 de agosto para definir los candidatos, se celebrarán las elecciones presidenciales y legislativas en Argentina, en un clima de conflictividad y desconfianza que se manifiesta en la sociedad, en la prensa y que el *Observatorio* constata desde 2012, con una consideración negativa creciente de la capacidad de la democracia para resolver los problemas que aquejan a la sociedad y del voto como factor de cambio, así como la percepción de que no existen condiciones adecuadas de libertad de expresión e igualdad de oportunidades. Esta percepción se ha visto reforzada por los múltiples casos de corrupción y de imputación por cargos gravísimos a altos representantes políticos, muchos de ellos muy cercanos a la presidenta, sin resolución judicial; y ha crecido de modo significativo desde la muerte de Nisman.

No es el primer fallecimiento sospechoso y ocultado bajo el velo de supuesto suicidio, de misteriosas muertes «accidentales» de personajes públicos cercanos al poder cuando estaban dispuestos a declarar o incurso en casos de corrupción, o tuvieron la mala suerte de ser testigos incómodos. Entre otros y desde 1989, los empresarios Alfredo Yabrán y Alberto Cattaneo (su cadáver de «suicida» apareció con un recorte periodístico en la boca), el brigadier Rodolfo Etchegoyen, el periodista José Luis Cabezas, la maestra Marta Meza, Lourdes Di Natale (secretaria del cuñado de Menem). Quienes cuestionaron el carácter accidental de la muerte de Carlitos Menem tuvieron también finales trágicos no esclarecidos: Lorenzo Epifani Siri, el peón rural que cuidaba el campo donde cayó su helicóptero y atestiguó haber oído detonaciones previas, falleció atropellado en la ruta nacional 9; el perito del Ejército del Aire Miguel Lucow, que presumió que no fue un accidente, murió a balazos en un atraco a la puerta de su casa; y su supuesto ladrón homicida, Ángel Antakle, falleció dos días después sin ir a declarar al juzgado por el crimen. Con tantos precedentes, no es extraño que la consultora Ipsos señale que el 68% de los encuestados crea que nunca se sabrá la verdad de la muerte de Nisman.

Sin embargo, esta vez la impunidad y la injusticia han tocado fibras morales profundas de amplias capas de la sociedad, que esperan que la alternancia política brinde una oportunidad de regeneración y dignidad al país. Las agrupaciones que se presentan en las primarias son El Frente para la Victoria con seis figuras peronistas cercanas a la presidenta, el Frente Amplio Progresista, el Frente Popular, el Frente Renovador —representado por el que fuera miembro del equipo de Cristina Fernández y ahora disidente, el también peronista Sergio Massa, que encabeza los sondeos—, el Partido Demócrata Cristiano, el Frente de Izquierda y Los Trabajadores, y finalmente la alianza del PRO (Partido Republicano) del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el liberal-conservador Mauricio Macri, que logró constituir una coalición con la UCR (Unión Cívica Radical) y con el CC-ARI (Coalición Cívica para la Afirmación de una República Igualitaria). De esta amplia relación de partidos, solo podrán participar con sus candidatos los que obtengan al menos el 1,5%

de los votos totales. La posibilidad de alternancia propia de las democracias maduras no está, ni mucho menos, garantizada, por el clima generado en el sistema mismo en su conjunto, por la presión ejercida a través de grupos como La Cámpora encabezada por Máximo Kirchner, y sobre todo por el clientelismo cuidadosamente cultivado a través de planes y programas entre las clases más vulnerables. Una medida que ensombrece aún más este panorama es la propuesta presidencial de otorgar a los jóvenes de 16 años la capacidad de votar, con la que el peronismo conjuraría el creciente descontento y se garantizaría un número importante de votos.

Todavía el país muestra un músculo vital que se sobrepone a las adversidades y a las injusticias; pero sería deseable, aunque poco previsible, que se acabara con la impunidad; y quienes dependen ya de forma habitual de las dádivas gubernamentales comprendieran que con ellas se está violentando su dignidad como personas, cercenando todas sus posibilidades futuras, limitando su libertad de elección de una vida propia y constructiva. Tal vez descubrirían que si se perpetúa la asistencia social es porque no se tiene la capacidad de generar las condiciones básicas para que los habitantes procuren por sí mismos su manutención y el ascenso social al que tienen derecho. Seguramente esa parte activa de la sociedad argentina que estudia, trabaja, investiga y produce con honestidad y esfuerzo, sin esperar nada a cambio del gobierno salvo la libertad de decidir y progresar con justicia, podría ofrecer a su país, sus mejores frutos y el ejemplo del que hasta ahora se les ha privado. ■

SALTERRAE



GABINO URÍBARRI, SJ (ed.)

La familia a la luz de la misericordia

256 págs.

P.V.P.: 13,95 €

He aquí una *nueva mirada* sobre la familia en la que, sin prescindir en absoluto de la doctrina eclesial sobre el matrimonio y la familia, se incorpora una triple impostación: la misericordia; la gradualidad de los procesos humanos y familiares; y el sentido pastoral, para evitar que la aplicación indiscriminada de la doctrina genere situaciones que rechinen contra el sentido común y el sentido del evangelio. Ello exige una reflexión seria para ir moldeando los cauces, modos, caminos y razones que la conformen y sostengan.



Apartado de Correos, 77 - 39080 Santander (ESPAÑA)
pedidos@grupocomunicacionloyola.com
